



ANÁLISIS Y DEBATE
1

LATINOAMÉRICA Y EL FINAL DE LA GUERRA FRÍA

Jorge G. CASTAÑEDA

Suceda lo que suceda últimamente en China, la Unión Soviética y Europa del Este, el final de la Guerra Fría ya afecta en forma extraordinaria al resto del mundo. Obviamente, Europa del Este siente más que muchas regiones la transformación radical de las relaciones internacionales, pero las consecuencias a largo plazo en otras áreas del globo no son menos significativas. Esto es cierto, en particular, para el Tercer Mundo. Si alguien sufre el impacto de la naturaleza destructiva de la Guerra Fría son las naciones pobres y atrasadas de África, Asia y Latinoamérica. Durante casi medio siglo, estas naciones han servido de campo de batalla para la confrontación de superpoderes, «fría» o «templada», encendida sistemáticamente.

Es interminable la lista de conflictos Este-Oeste en el hemisferio sur desde que concluyó la II Guerra Mundial: empieza con las guerras anti-coloniales de los cincuenta y sesenta, y continúa en las luchas ideológicas de principios de los ochenta, de los arrozales en el sudeste

asiático a las selvas de Centroamérica; de los desfiladeros helados de Afganistán a los trópicos sofocantes de Africa Sudoccidental.

Si la reducción dramática de las tensiones entre superpoderes implica la eliminación virtual del riesgo de una guerra nuclear para estadounidenses, soviéticos y europeos, para los habitantes de las regiones más pobres del globo significa el mismo descanso de la amenaza de extinción, más un regalo: la esperanza de borrar uno de los principales factores que han exacerbado conflictos en su tierra por más de medio siglo.

En Latinoamérica, la conclusión de la Guerra Fría da un efecto mezclado. Hay un aspecto evidentemente positivo y hay implicaciones negativas. Un efecto favorable se relaciona con la política estadounidense hacia la región. Dejando a un lado la reciente invasión a Panamá, existen razones para creer que la situación internacional influirá decisivamente en la forma en que Estados Unidos aborda al hemisferio en general, y los problemas de cambio social, revolución y reforma en Latinoamérica.

Al reducir —y eventualmente eliminar— la realidad y la creencia de una amenaza soviética a su seguridad, la nueva relación entre superpoderes redefine los estreñimientos y los márgenes de la política estadounidense en Latinoamérica; se desvanece su apuntalamiento antisoviético, geopolítico, en el hemisferio.

En gran medida, el antisovietismo estadounidense es ya anacrónico, aun cuando las consecuencias de su eliminación no sean aún del todo evidentes. Nunca logró tanto apoyo fuera como domésticamente. Aun en el clímax de la Guerra Fría, Estados Unidos rara vez obtuvo el apoyo del resto del hemisferio —no digamos del mundo— cuando intervino en las cuestiones latinoamericanas. Su aproximación antisoviética en los asuntos del subcontinente obtuvo su respaldo pleno una sola vez: durante la crisis de los misiles en territorio cubano, cuando pareció indiscutible la amenaza soviética a su seguridad. Fue notoria la suspensión de relaciones diplomáticas y en muchos casos económicas de la mayoría de los países latinoamericanos en Cuba, sobre todo por su excepcionalidad, que respondía a poderosos impulsos locales, anticomunistas.

Prácticamente ninguna nación latinoamericana siguió a Estados Unidos en sus acciones contra Perú a finales de los sesenta, ni contra Chile a principios de los setenta, o contra Nicaragua después de 1981. En cuanto al resto del mundo, la retórica y la estrategia antisoviética de Washington en Latinoamérica se percibieron más como una forma de defender otros intereses que como base genuina de su política. Pero en materia doméstica, dado que existía apoyo para su involucramiento en la región, obtuvieron un respaldo importante de los sectores de la sociedad estadounidense convencidos de la existencia de una amenaza soviética «en su propio patio trasero».

En realidad, como sucede con cualquier fundamento ideológico para asuntos externos, la hostilidad estadounidense a la presencia o amenaza soviética en Latinoamérica tenía algunas bases, y fue también instrumento para aglutinar al electorado doméstico en favor de las políticas que buscaban otros objetivos.

El antisovietismo estadounidense nunca fue del todo cínico y deshonesto, ni tan altruista o válido como para intervenir en el área. Pero fue un ingrediente indispensable en su política hacia la región. Sin éste, son incomprensibles la bahía de Cochinos y la Alianza para el Progreso, el respaldo a las «dictaduras de seguridad nacional» en Brasil, Uruguay, Bolivia, Argentina y Chile durante los sesenta y principios de los setenta; los rescates sucesivos a la deuda mexicana multimillonaria en dólares; los contras en Nicaragua en los ochenta.

Si continúa la tendencia actual en las relaciones entre los superpoderes, es inevitable que se erosionen las motivaciones tradicionales y los pretextos consabidos para una intervención estadounidense. Es obvio que Estados Unidos continuará interviniendo en los asuntos latinoamericanos —Panamá es un claro ejemplo— y seguirá oponiéndose a ciertas formas de cambio social en el hemisferio. Pero no podrá hacerlo invocando temores geopolíticos o de seguridad hacia la Unión Soviética. La justificación ideológica acostumbrada por Washington para involucrarse militarmente en Latinoamérica, ya no está a la mano, no es creíble. Aun la reciente intromisión en Panamá difirió radicalmente de los casos previos de intromisión. La administración Bush en ningún momento justificó o explicó su acción con argumentos antisoviéticos, de Guerra Fría; ninguna de las razones ofrecidas por la Casa Blanca tuvo que ver con una rivalidad de superpoderes.

Este cambio positivo, que sin duda amplía el campo de acción de muchas naciones del hemisferio, conlleva también desventajas importantes. La más seria, quizá, se deriva directamente de la eliminación de la base antisoviética para la política estadounidense en el hemisferio. Gorbachov ha dejado a Estados Unidos sin adversario en una área donde el enemigo, aunque real sin duda, nunca estuvo tan presente ni fue tan avasallador como hizo creer Estados Unidos. En consecuencia, otros motivos sustitutos —la lucha contra las drogas, y en menor medida, el freno a la inmigración— empiezan a llenar el vacío ideológico rápidamente. El imperio maligno del Este (soviético/comunista) abre paso a la barriada maligna del Sur (productora de drogas/generadora de inmigrantes).

El sufrimiento de las drogas como faceta importante de la política estadounidense hacia la región, no comenzó con el deshielo de las relaciones Este-Oeste. La lucha contra las drogas ha jugado un papel importante en la política estadounidense hacia México, los países andinos y Cuba durante algunos años. Este papel fue claramente «intervencionista», y las drogas sirvieron como vehículo para la intromisión de Es-

tados Unidos en los asuntos internos de muchas naciones latinoamericanas. Al paso de los años, surgieron formas altamente entrometidas de cooperación, incluyendo el respaldo estadounidense a las autoridades colombianas —extensivo a la contra-insurgencia—; el establecimiento de una base de la DEA (Drug Enforcement Administration) en el valle del Alto Huallaga en las montañas peruanas; el envío de destacamentos militares a Bolivia en 1987 y, recientemente, el secuestro de un ciudadano mexicano en México para llevarlo a juicio dentro de Estados Unidos. Pero si bien las drogas son un asunto viejo en sus relaciones con Latinoamérica, a últimas fechas adquirieron importancia en las relaciones hemisféricas, por el advenimiento de las drogas como un asunto de política interna y la eliminación de otras justificaciones ideológicas para su política.

No es accidental que la invasión de Panamá se presente, al menos subliminalmente, como una acción antidrogas, esto es: su popularidad dentro de Estados Unidos se debe, en gran medida, a que se percibe a Noriega como narcotraficante. La primera intervención estadounidense en Latinoamérica sin la envoltura de la Guerra Fría, es también el primer intento de Estados Unidos por justificar el uso de la fuerza en el exterior en términos de lucha anti-narcóticos. Por supuesto, esta sustitución de la Unión Soviética por las drogas como amenaza a su seguridad no se limita a Panamá. La militarización creciente de la frontera con México, el intento de enviar portaviones a las aguas internacionales frente a la costa de Colombia (sin consultar a las autoridades colombianas) y el papel más amplio de las fuerzas armadas que patrullan las rutas de la droga en el Caribe, muestran que las drogas se han convertido en algo más que un tema en la agenda interamericana, y se vuelven un asunto hemisférico con peligrosas implicaciones para la soberanía latinoamericana, conforme Estados Unidos propone formas de cooperación más entrometidas.

La inmigración no ha logrado todavía esa condición, en parte por falta de consenso dentro de Estados Unidos, y porque su impacto emocional no pertenece todavía a la misma liga que las drogas. No obstante, es muy probable que el tema desarrolle importantes implicaciones de política exterior, conforme se hagan evidentes los efectos no planeados del Acta de Inmigración y Control de 1986 —notoria, masiva y continua entrada de extranjeros indocumentados— y se empiecen a sentir los efectos previsibles de los 10 años de estancamiento económico latinoamericano— desempleo extenso, caída de salarios y, como resultado, un éxodo masivo hacia el norte.

Mientras esto ocurre, existen muchas razones para temer que la inmigración ocupe un papel creciente en la política exterior estadounidense hacia los países que generan migración, en vez de ser un asunto interno con implicaciones esporádicas y secundarias para la política externa. Si la inmigración —legal o no, documentada o no— comienza a verse

como una amenaza importante para el bienestar, la seguridad e incluso la identidad nacional estadounidense, quizá los veremos tratar este asunto en la misma forma que las drogas. Las raíces del problema se buscarán de nuevo en el exterior —en este caso quizá más justificablemente— y las soluciones hipotéticas habrán de localizarse con más frecuencia en los países de origen.

A largo plazo, parece dudoso que estos sustitutos del antisovietismo estadounidense sean tan efectivos o tan nocivos a la soberanía y la libertad de acción latinoamericanas como su precursor. Las drogas y la inmigración son motivos ideológicos menos duraderos y universales, y abarcan menos que el anticomunismo. Los nuevos asuntos carecen del tipo de consenso doméstico sin el cual no pueden perdurar. Pero a corto plazo pueden generar más tensiones y ser más perniciosos para los intereses latinoamericanos que la tradicional ideología de Guerra Fría; están ligados más íntimamente a la política interna estadounidense; tocan con más crudeza los valores emocionales que los geopolíticos; se prestan a formas más entrometidas de cooperación; extraen lo peor de la conducta estadounidense internacional (arrogancia, autojustificación, omnipotencia) y subliman lo mejor (generosidad, multilateralidad y apego a los principios). Esta desafortunada tendencia puede agravarse si los sucesos terminan por confirmar la tesis de la «Fortaleza América». Muchos académicos en Latinoamérica y en otras partes han sugerido que conforme emerjan otros bloques regionales de comercio en Europa y Asia, y mientras Estados Unidos continúe perdiendo su fuerza relativa en la economía mundial, retornará a su esfera de influencia tradicional, Latinoamérica, en una especie de «aislamiento hemisférico». Entonces las drogas y la inmigración no serán sólo justificaciones para intervenir y coartar la soberanía latina, sino una fachada para una nueva expresión, puramente económica, de la Doctrina Monroe. Y aunque este punto de vista pueda ser exagerado o reflejar un grado excesivo de autoimportancia latinoamericana, está bastante extendido. Y puede que no sea del todo falso.

Latinoamérica puede verse afectada negativamente por la conclusión de la Guerra Fría de modo distinto. El final de la rivalidad de los superpoderes, vista por el mundo, implica la eliminación de un contrapeso en los asuntos internacionales, útil en el pasado a muchas naciones de Latinoamérica. Pocos gobiernos del continente se han atrevido de verdad a enfrentar un superpoder contra otro, como lo hacen con frecuencia los regímenes en otras partes del mundo —del Norte o del Sur—. La táctica india, china, egipcia, incluso francesa, de coquetear con un superpoder para congraciarse con el otro nunca fue por entero creíble en Latinoamérica, y se ha buscado únicamente en casos excepcionales o extremos. La compra de Migs soviéticos por los militares peruanos en los setenta, la venta de grano argentino a la Unión Soviética durante el embargo estadounidense en los ochenta, y otros pocos ejemplos significativos, agotan con rapidez la lista de precedentes al respecto.

No obstante, la importancia del contrapeso ha sido bastante evidente: el bloque soviético, la «opción japonesa» presente siempre como espejismo sin materializarse para Latinoamérica, o incluso Europa Occidental.

Durante los setenta y a principios de los ochenta, muchos gobiernos latinoamericanos cortejaron a Europa Occidental, en especial a sus partidos socialdemócratas, como posibles socios alternativos a los Estados Unidos. En particular, la crisis centroamericana aumentó la necesidad y la viabilidad de una participación de la Internacional Socialista en los asuntos del hemisferio. Es una paradoja trágica que al mismo tiempo que la Unión Soviética y el bloque socialista desaparecen como contrapeso efectivo, Europa Occidental retire gradualmente su escasa participación en Latinoamérica, precisamente por los sucesos de Europa Oriental. La evaporación del contrapeso europeo hará, inevitablemente, más significativo al soviético —nunca usado en su totalidad aunque siempre disponible—.

La idea generalizada de un disuasivo soviético para las ambiciones y rienda suelta estadounidense siempre estuvo presente en muchos líderes políticos latinoamericanos. Era evidente que la existencia del «otro lado» —un superpoder militar y quizá políticamente igual a Estados Unidos—, era un freno adecuado e incluso efectivo a la política de Estados Unidos, país que no podía hacer en Latinoamérica lo que quisiera, entre otras cosas porque estaba en juego la regla de las simetrías y de la acción —respuesta mundial, a pesar de la aceptación soviética tácita de la esfera de influencia estadounidense.

Si Estados Unidos intervenía descaradamente en Latinoamérica o ignoraba las reglas básicas de derecho o conducta internacional, decía la teoría, la Unión Soviética podría usar estas faltas contra Washington —quizá no en Latinoamérica pero sí en otras partes. La política de Ronald Reagan hacia Centroamérica mostró que ese punto de vista era ingenuo en extremo. Y las acciones de George Bush en Panamá, de la invasión en sí misma a las acciones tomadas contra las embajadas de Cuba y Nicaragua, por no mencionar aquellas contra la legación del Vaticano mientras estuvo ahí Manuel Antonio Noriega, demostraron que la disuasión soviética ya no funcionaba. No hubo razones para que Estados Unidos temiera represalias en algún lugar del mundo por violar toda norma concebible de protocolo, inmunidad o asilo diplomático.

A pesar de las consecuencias serias y potencialmente negativas de estas tendencias, la mayor preocupación que genera en Latinoamérica el final de la Guerra Fría es de naturaleza económica. Los gobiernos y élites, en especial aquellos que apostaron al financiamiento externo para la reestructuración doméstica en concordancia con los lineamientos del llamado mercado libre, temen que los sucesos en Europa Oriental reduzcan las posibilidades de obtener los recursos que necesitan. El pro-

blema tiene tres aspectos separados, pero se cuecen en uno solo: la percepción latinoamericana de que ahora más países compiten por el mismo pastel y que habrá menos para repartir. En primer lugar, los países mayores temen que los flujos de inversión y crédito privados se desvíen de la región y se dirijan a los nuevos capitalismos de Europa Oriental. Este fue claramente el fondo de los viajes a Europa y Asia que los presidentes Carlos Salinas de Gortari, de México, y Fernando Collor de Mello de Brasil, realizaron a mediados de 1990. Los líderes de la mayores economías del continente enfatizaron su preocupación de que, en palabras de Salinas, «la fascinación mundial por los eventos de Europa del Este no desvíe la atención ni los recursos de otros países.» Pero el motivo de los viajes fue, en gran parte, el temor de que los acontecimientos en Europa tuvieran precisamente esas implicaciones.

A corto plazo, y en términos agregados, esta preocupación específica no parece muy bien fundada. Aunque es indudable que algunas inversiones y créditos destinados originalmente a México y Brasil puedan acabar en Hungría, Polonia o Checoslovaquia, esa desviación en el goteo no se convertirá en una inundación de la noche a la mañana. Sólo en el caso de Alemania Oriental se harán sentir de inmediato flujos sustanciales de inversión extranjera, y no es claro que se hubieran canalizado a Latinoamérica en otras condiciones.

En cuanto a las expectativas razonables de crédito e inversión para las principales economías latinas, la pérdida neta por Europa Oriental deberá ser insignificante a corto plazo. Las anteriores economías socialistas no pueden absorber rápidamente grandes cantidades de dinero del exterior, los grandes bancos y corporaciones no se lanzarán a aventuras románticas, y de cualquier modo nunca estuvo disponible mucho dinero para Latinoamérica.

El miedo a quedar fuera de la jugada tiene más fundamento en cuanto a los flujos financieros oficiales y multilaterales. Es obvio que el Congreso estadounidense, el gobierno japonés y la Comunidad Económica Europea —en especial la República Federal Alemana—, están más interesados en canalizar los fondos de los contribuyentes, directa o indirectamente, a Europa Oriental que a Latinoamérica. Ejemplos concluyentes de esta disposición vienen a ser, entre otros, los paquetes de ayuda del Congreso estadounidense para Polonia y Hungría, la reducción de 10 a 4 millones de dólares en la ayuda japonesa a Latinoamérica en los próximos cinco años (los 6 mil millones de dólares restantes se redestinaron a Europa Oriental), y el establecimiento del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

El desvío de los flujos de ayuda gubernamental afecta principalmente a las naciones latinas que reciben ayuda, y excluye a las economías mayores como Brasil, México y Argentina, que obtienen de parte de Estados Unidos y Europa sólo asistencia marginal para el desarrollo (es re-

lativamente más importante la ayuda de Japón en este punto). La preocupación es mayor en las naciones latinas más pequeñas que tradicionalmente cuentan con ayuda estadounidense y que, en casos como Nicaragua o Panamá, la necesitan enormemente aunque sólo sea para compensar su destrucción previa, fraguada por Estados Unidos. Pero la otra faceta de este problema —los recursos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— afecta directamente a todo el hemisferio, y su impacto puede ser devastador en las economías mayores.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han sido siempre una parte importante en el financiamiento de Latinoamérica, pero nunca tan decisivamente como hoy. De hecho, los paquetes de restructuración de deuda más importantes de los últimos años, incluyendo los acuerdos recientes con Venezuela y México, se basan todos en otorgar préstamos multilaterales en vez de préstamos de balanza de pagos bancarios tradicionales. Es más, como este proceso lleva un tiempo operando, los pagos principales de deudas previas están por vencer, al terminarse los periodos de gracia. Dado que el Banco Mundial no retira sus pagos de capital, pero en teoría concede nuevos préstamos para mantener flujos positivos en sus deudores, se hacen necesarios nuevos préstamos importantes para Latinoamérica, tan sólo para no perder terreno, no se diga para compensar créditos bancarios comerciales perdidos. Los nuevos préstamos a Europa Oriental habrán de situar, inevitablemente, más presiones a las capacidades de estas agencias. Un incremento a los capitales del Banco Mundial y el FMI facilitarían las cosas, pero la competencia por mayor financiamiento, estimulada por este incremento, nulificaría su efecto en Latinoamérica.

Más allá de los aprietos financieros inmediatos que puedan resultar de los acontecimientos en lo que alguna vez se llamó el «bloque socialista», existe un efecto adicional que puede ser más intangible. Por ahora, hay un claro desvío de atención: Latinoamérica está menos que nunca bajo el reflector de los asuntos mundiales. Y la atención es decisiva, pues el tipo de financiamientos del exterior que intentan atraer gobiernos como el de Salinas en México, Collor de Brasil, Menem de Argentina y Carlos Andrés Pérez de Venezuela, es privado, diverso y, al menos en parte, de pequeña y mediana escala.

Las grandes corporaciones multinacionales o megabancos no harán decisiones repentinas basándose en encabezados de periódicos o en pura «atmósfera». Pero las firmas pequeñas o medias, o las grandes compañías sin experiencia en el extranjero actúan hasta cierto grado de acuerdo a la sensación general y a un clima superficialmente favorable para los negocios.

Por desgracia, el hemisferio está pasado de moda, quizá fuera de época. Y conforme pasa el tiempo sus precauciones pueden ser justificadas. Es paradójico que después de tantos años de preocuparse por la

excesiva intromisión estadounidense, Latinoamérica pueda sufrir por la indiferencia de Estados Unidos, aunada a la tradicional, relativa falta de interés del resto del mundo. Conforme se desvanece la motivación geopolítica de Estados Unidos hacia la región, su componente económico puede también encogerse. El hemisferio podría muy bien encarar un prospecto de «africanización» —condenado a los márgenes del flujo comercial y financiero mundial y, además, inevitablemente, al abandono y la irrelevancia. Cautivo en la hebra de una tensión contradictoria y perversa: entre las nuevas formas de intervención estadounidense en sus políticas internas y las nuevas expresiones de indiferencia estadounidense y mundial a sus necesidades.

Al margen de estas tendencias económicas e internacionales, el final de la confrontación de superpoderes dejó ya una marca inmediata y duradera en Latinoamérica. En cada nación del hemisferio tiene lugar una importante transformación política conforme los partidos, los movimientos y los regímenes de izquierda y centro-izquierda de la región se ajustan —o dejan de ajustarse— a los enormes cambios que tienen lugar en Europa Oriental, la Unión Soviética y el «bloque socialista» en general. Para la izquierda latina, estos cambios son aterradores a corto plazo: obsérvense las elecciones de Nicaragua y la forma en que lanzaron a las fuerzas regionales de la izquierda hacia una depresión colectiva. No obstante, si al menos una parte de esta izquierda prueba su capacidad de adaptarse a la nueva situación mundial, a largo plazo los acontecimientos en el «bloque socialista» pueden acabar siendo lo mejor que pudo pasar en muchos años.

La izquierda ortodoxa, tradicional en Latinoamérica, fue devastada por el colapso del «socialismo en una región» y por las reformas profundas llevadas a efecto por Mijail Gorbachov en la Unión Soviética. La «crisis» diezmó a los partidos comunistas tradicionales, y de por sí muchos de ellos se habían debilitado en años recientes. Pero la devastación no se limitó a la izquierda ortodoxa: de uno u otro modo ha ocurrido a todo lo ancho. Afectó con severidad a las organizaciones político-militares castristas que surgieron en Centroamérica después de finales de los setenta. Golpeó a los movimientos con tendencias socialdemócratas, ya fueran radicales (Brasil) o moderados (Chile y México), que emergieron en Latinoamérica en años recientes y que estaban mejor preparados que otros grupos para lo que ocurrió. Tocó incluso a los partidos socialdemócratas más conservadores (Venezuela, Costa Rica), aunque mucho menos que a ningún otro sector de la izquierda.

El paradigma socialista le era fundamental a la izquierda en Latinoamérica. Todas las críticas dirigidas por los partidos o los individuos de la izquierda en el hemisferio hacia el «socialismo realmente existente» durante los últimos treinta años —muchas profundamente sustanciales y sinceras— se formularon dentro del marco del paradigma socialista. Cuba misma se volvió parte de este paradigma, aunque originalmente

muchos izquierdistas la vieron como una alternativa o una revisión fundamental del socialismo existente en la Unión Soviética y Europa Oriental.

Cada partido, movimiento, gobierno e intelectual progresista añadía, restaba o «rectificaba» aquellos aspectos de la realidad soviética, y más tarde cubana, que requerían cambios. No obstante, había siempre una vinculación subyacente con la Unión Soviética, y luego con Cuba. Era la base para una alternativa: la matriz se ajustaría a las peculiaridades locales, una vez destinados los rasgos inaceptables o las omisiones decisivas que cada sector de la izquierda juzgaba relevante. Como tal, el fin del paradigma —su virtual disolución de la noche a la mañana en Europa del Este, su revisión en la Unión Soviética y su irrelevancia obsoleta en Cuba— significa la desaparición del punto de referencia izquierdista para concebir una alternativa al estado actual de Latinoamérica. Aun los impresionantes logros de la revolución cubana en educación y salud, y en la erradicación de la pobreza extrema en la isla —el aspecto más atractivo del experimento cubano—, se perciben como poco deseables, poco viables, o ambos, por ser muy costosos y demasiado estatistas. Se cuestiona con severidad la sola idea de una alternativa global, de cualquier tipo, al *statu quo*. Ahora, es imposible para la izquierda pensar fuera de los parámetros existentes de la realidad latinoamericana actual. Más aún, la idea misma de revolución que durante décadas fue axial para el pensamiento radical latinoamericano, ha perdido su significado. La crisis de la revolución no surge porque hayan cambiado las causas que fundamentaban su inevitabilidad y su pertinencia; ahora están más presentes y son más relevantes que nunca. Pero se desvaneció la idea de revolución porque su resultado se volvió poco atractivo, o inimaginable, y porque, después de las elecciones de 1990 en Nicaragua, también se hizo reversible.

La reversibilidad de experiencias teóricas decisivas para la izquierda —sobre todo la del gobierno de Unidad Popular dirigido por Salvador Allende en Chile de 1970 a 1973— pudo explicarse en última instancia, en términos de traición militar (Chile, 1973; Brasil, 1964), intervención estadounidense (Guatemala, 1954; Granada, 1983), o por los errores y la ingenuidad de la izquierda. Pero la derrota del Frente Sandinista en las elecciones de 1990 fue un rechazo de la gente misma, si bien sometida a coacción o incluso chantaje. Significó que el proceso revolucionario podía revertirse no sólo por la fuerza, sino libre y pacíficamente, con el consentimiento y aun el apoyo entusiasta de aquellos que lo pusieron en marcha.

Bajos estas nuevas condiciones, los revolucionarios no pueden sobrevivir. Pero sin revolucionarios la idea de revolución se evapora o está condenada a prosperar sólo bajo condiciones extremas, como aquellas del altiplano peruano. La gente no se muere, va a prisión, resiste la tortura, o dedica años de sus vidas a pelear por algo que no pueda ubi-

carse o pensarse en términos concretos y que no sea definitivo. Ahora que el FMLN en El Salvador gira hacia una solución negociada de la guerra civil, Sendero Luminoso bien puede ser la última organización revolucionaria en Latinoamérica, en gran medida porque su aislamiento del resto del hemisferio lo hace relativamente impermeable a la desaparición del paradigma revolucionario y al corolario de su permanencia. Este fin hipotético de la revolución no implica ningún tan llamado «fin de la historia», pero sí conlleva el fin de ciertas ideas de la historia.

Desde el siglo XIX, con el principio del pensamiento socialista y subsecuentemente marxista, la idea de un futuro diferente —e implícitamente mejor— fue una constante en los movimientos progresistas contra lo establecido. El futuro no habría de ser tan sólo algo más que el presente, sino un estado de existencia sustancialmente distinto, ontológicamente superior. De hecho, la noción de progreso fue central en esta enorme corriente de pensamiento, pero el progreso implícito no fue nunca lineal por naturaleza. Esta visión del mundo se entramaba a la perfección con las raíces u orígenes católicos de muchas partes de la izquierda latinoamericana, y se ensamblaba muy bien con las características particularmente repugnantes e inaceptables del presente eterno del hemisferio (mientras peor se viera el presente, más importante era la idea de un futuro cuantitativamente mejor).

La influencia católica, la noción marxista del progreso y la desesperanza del intelectual latino inmerso en un estado de cosas siempre deprimente, se conjugaron en el pensamiento contemporáneo de la izquierda latinoamericana: el futuro incluía la redención, la revancha y un encuentro final en que el bien triunfaría sobre el mal, el pobre sobre el rico, el indígena sobre el extraño. La desaparición del paradigma socialista en Latinoamérica la dejó, por así decirlo, sin futuro. Por ahora, la visión de un estado superior de cosas no es ya creíble y, en consecuencia, ya no es funcional. Lo único que queda es la lucha por un futuro que en esencia es extensión del presente.

La caída del paradigma va más allá de los sectores de la izquierda identificados directamente con la experiencia socialista. De hecho, el colapso de los modelos soviético, europeo oriental y cubano, desacreditaron los tópicos y políticas que fueron caros al progresista latinoamericano de centro-izquierda, siempre nacionalista, pero nunca expresamente socialista o «marxista-leninista». Esto es cierto, en particular, para un punto común a todo sector de la izquierda latinoamericana, desde el margen radical hasta el centro moderado: el papel del Estado en la política económica y social.

Si la Unión Soviética, Europa del Este y Cuba fueron fracasos, entonces las políticas que aplicaron, en especial en el campo de la economía, son claramente responsables de esos fracasos. Y entre estas políticas, para Latinoamérica fue relevante, sobre todo, el papel primordial

del Estado en la economía. Un Estado ampliamente propietario en el sector económico, subsidios a todo lo ancho, y al menos la pretensión de una red de seguridad social, fueron rasgos importantes del desarrollo latinoamericano de la posguerra, junto con una industrialización orientada a la sustitución de importaciones. Debido a sus propias contradicciones, pero también por asociación con el «socialismo en bloque», este modelo de desarrollo llegó a verse como algo particularmente pernicioso. Lógicamente, el hecho de que Europa del Este y la Unión Soviética abandonen el modelo económico de planeación central constituye un precedente —y una razón adicional— para reducir drásticamente el papel del Estado en la economía latinoamericana.

La izquierda moderada perdió ya parte de su paradigma, en favor de las políticas económicas conservadoras implantadas en las naciones latinoamericanas desde mediados de los ochenta. La crisis de la deuda y sus interminables renegociaciones, y el condicionamiento que acarrea cada nuevo acuerdo en función de las reformas económicas estructurales promovidas por el Banco Mundial y la comunidad financiera internacional, debilitaron dramáticamente al «Estado benefactor latinoamericano». Más aún, el advenimiento de la «revolución conservadora» de Ronald Reagan, que tuvo quizá más impacto fuera que internamente, significó que las políticas de libre mercado, las aproximaciones abiertas de comercio e inversión y una total dependencia hacia el sector privado, se consideraran la receta probada para el éxito económico en Latinoamérica. Esta creencia se implantó por la percepción de que habían funcionado en países como Estados Unidos y la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, y eran responsables del exitoso desarrollo asiático —Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur—. Así, el cambio de un desarrollo económico subsidiado, protegido, hacia adentro, propiedad del Estado, a un modelo de «libre mercado», se abrió camino en Latinoamérica antes de seguir una tendencia mundial y al fracaso o agotamiento de aproximaciones previas, que a un análisis cuidadoso de su posible funcionamiento.

Los modelos existentes se asociaron a la izquierda y al fracaso, mientras la nueva alternativa, supuestamente moderna, se identificó con el éxito en otros países y con la derecha latinoamericana. No se consideró, simplemente, que en países como Brasil y México, el modelo previo de desarrollo no lo puso en práctica la izquierda, sino los militares en el primer caso, y la institución de un solo partido —el PRI— en el segundo. Tampoco se tomó en cuenta que «los tigres asiáticos» no siguieron para nada las políticas radicales de «libre mercado» —y mucho menos Japón— y que el alcance de los éxitos económicos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher fuera relativo y discutible.

Al momento en que la Unión Soviética y Europa Oriental entraron a escena, el molde estaba forjado; los sucesos en esa parte del mundo confirmaron las ideas y certezas previas. Se asoció a la izquierda latinoame-

ricana —injustamente— a las políticas económicas fracasadas, descartadas del mundo socialista: la derecha se avocó a los mismos cambios operados en las naciones previamente socialistas. La izquierda se encontró así ante la imposibilidad de ganar. O se plantaba en sus afirmaciones —que no eran realmente suyas, pero a las que había sido lanzada— y defendía lo indefendible (una economía subsidiada, cerrada, manejada por el Estado, en un mundo donde la mera noción de tal cosa parecía totalmente obsoleta), o le daba vueltas y apoyaba el curso del libre mercado, aparentemente moderno, competitivo, y terminaba imitando —o asimilándose— a la derecha. La izquierda latinoamericana moderada se vio forzada de esta manera, como dice Régis Debray del socialismo europeo, a tener logros únicamente si ponía en práctica las políticas de sus adversarios, y se le condenó al fracaso cuando trató de aplicar su propio programa.

La caída del bloque oriental, dado el descrédito total de cualquier política asociada remotamente con esa parte del mundo, contribuyó a la impresión de que la izquierda estaba desprovista de alternativas políticas y teóricas. Esta impresión acabó por reflejar una realidad indispensable: conforme el éxito político se encadenó más a la política económica, y la viabilidad de esta última dependió en esencia del financiamiento externo, la izquierda en Latinoamérica fue incapaz de proponer una alternativa discernible, coherente y financiada adecuadamente. No porque el libre mercado estuviese funcionando de verdad en algún lugar de Latinoamérica; su única muestra era Chile, y ahí los resultados y sus métodos eran muy cuestionables. En teoría, esta alternativa tampoco era aplicable a todos los países al mismo tiempo, pues al igual que el modelo previo de sustitución de importaciones requería abundantes recursos del exterior, que bajo ninguna circunstancia estaban disponibles para todas las economías latinoamericanas al mismo tiempo. Pero el consenso en torno a las políticas de «libre mercado» no sentaba sus bases en éxitos reales; fue un fenómeno puramente ideológico, apoyado por el fracaso de políticas anteriores —en Latinoamérica, Europa Oriental y la Unión Soviética.

La única alternativa posible para la izquierda fue particularmente difícil de vender —si no imposible— en lo político. Era inevitable que estuviera llena de matices, claroscuros, en vez de soluciones simples, pegajosas, atractivas. Era, nada más y nada menos, que una política económica ajustada e intermedia, bajo circunstancias económicas y políticas distintas. Implicaba más disminución y menos servicio de la deuda —una diferencia de grado, pero con efectos cualitativamente distintos—. Proponía más gasto público y un sentido mucho mayor de justicia social dentro de los límites impuestos por la escasez de recursos; menos privatización y una administración contable más honesta por parte del sector económico controlado necesariamente por el Estado —una vez más, un matiz significativo, pero matiz al fin—, implicaba menor apertura al comercio y de naturaleza más selectiva, y de ninguna manera un retorno al

proteccionismo pleno que para empezar nunca existió realmente. Significaba un papel mayor y más importante del Estado en lo económico, pero un Estado diferente —democrático, honesto, responsable—, menos dependiente del sector privado, local o extranjero. Esta alternativa no planteaba una total estatización de la economía —lo cual nunca ha ocurrido en Latinoamérica, a excepción de Cuba— ni la eliminación o marginación del sector privado. Sí requería una relación totalmente nueva con éste, sin la provocación y la hostilidad de la izquierda tradicional ni los sistemáticos socavamientos, los chantajes y alcahueterías de la nueva derecha. Demandaba además un nuevo entendimiento con Estados Unidos, sin la antipatía de la izquierda ni la subordinación de la derecha.

Tal programa fue hipotéticamente viable sólo cuando se le identificó con una figura o partido político atractivo para el electorado por razones diversas —personales (Cárdenas en México), étnicas (Fujimori en Perú), o regionales (Brizola en Río de Janeiro)—. Aun así, una plataforma de este tipo pareció condenada al fracaso por la pobreza de los fondos disponibles del exterior; le faltaba el encanto necesario para obtener financiamiento externo. (No se toma en cuenta que los experimentos latinoamericanos conservadores de gran altura —Salinas, Collor, Menem— obtuvieron la aclamación y el aplauso en el extranjero, pero dinero no, a pesar de su conformidad con la moda). Por sí solo, el programa de la izquierda no podía ganar las elecciones o conducir una insurrección. No era más que la repetición actualizada del modelo de desarrollo latinoamericano tradicional, aplicado ahora en sociedades urbanas, ampliamente letradas, políticamente democráticas, circundadas por un mundo multipolar y una escasez de recursos externos. Es paradójico que la izquierda, conocida por su extremismo e improvisación en Latinoamérica, propusiera un curso nada espectacular, moderado y a largo plazo, que mejoraría los estándares de vida lenta y modestamente, en tanto la derecha, por tradición prudente, se convertía en vocero de una «revolución» de naturaleza conservadora, gestos dramáticos y soluciones radicales y rápidas.

El síndrome de culpa por asociación que plagó a la izquierda latina moderada por sus políticas económicas, es extensible a toda la izquierda latina en otros aspectos críticos, tales como la democratización. Esto se debe en gran medida a que importantes sectores de la población perciben un eslabón entre la izquierda local y Cuba, la Unión Soviética y Europa Oriental. Por supuesto, es fácil exagerar la importancia de esta impresión. Los problemas de la izquierda latinoamericana no son iguales a los de la izquierda socialista en Europa Oriental; Cuba, por ejemplo, nunca sufrió en el hemisferio la misma antipatía y rechazo que provocaba la Unión Soviética en muchas partes de Europa. Por tanto, es notorio que el factor decisivo en la derrota electoral de los sandinistas fue su identificación con la Unión Soviética, Cuba, o el socialismo en general, en contraposición a factores internos. Hay, en todo caso, ejemplos distintos igualmente significativos: los resultados de las elecciones del 15 de diciembre de 1989 en Brasil, no revelan un desgaste discernible en

el apoyo al candidato de la izquierda, Luis Inácio da Silva («Lula»), en función de los acontecimientos que ocurrían simultáneamente en Alemania Oriental, Checoslovaquia y Rumania. Pero aunque el eslabón causal sea menos directo y automático de lo que se pretende, para muchos sectores de la sociedad latinoamericana el fracaso del Este constituyó la caída definitiva de la izquierda en casa. El rechazo a los sandinistas en las urnas tiene este tinte fuera de Nicaragua.

De igual modo, la campaña electoral de 1989 en Chile tiene connotación análoga: los candidatos del ala derecha, en particular Hernán Buchi, trataron sistemáticamente de vincular a Patricio Alwyn, el demócrata cristiano, primero con la izquierda chilena (sobre todo con el partido comunista), y luego con las políticas fracasadas del socialismo europeo oriental. La campaña de Mario Vargas Llosa por la presidencia de Perú incluyó algunas alusiones familiares que vinculaban a la extrema izquierda peruana con las características autoritarias, antidemocráticas o totalitarias del bloque del Este, y a la izquierda moderada con las políticas estatistas, populistas, de las economías planificadas centralmente.

Quizá nunca fue tan directo el nexo entre la izquierda latinoamericana y la falta de democracia en Europa Oriental y la Unión Soviética como pretendieron la derecha y los Estados Unidos; pero sí tenía un grano de verdad. Cuba, y después Nicaragua, eran ese nexo. En la mayoría de los casos, y en cualquier país de Latinoamérica, las fuerzas de la izquierda estuvieron al frente de la lucha por la democracia contra las dictaduras militares, las oligarquías o los sistemas autoritarios unipartidistas *de facto*, durante los pasados 30 años. En ese sentido, la mayor parte de la izquierda fue democrática, al menos en cuanto a sus fines. Pero la cercanía de sus ligas con la Unión Soviética, y por encima de todo con Cuba y después con Nicaragua y el FMLN en El Salvador, hicieron sospechosas sus credenciales democráticas a los ojos de la derecha, los medios de comunicación y los Estados Unidos.

La falta de posturas claras ante las prácticas antidemocráticas que de hecho han ocurrido en Cuba, y en mucho menor grado en Nicaragua, así como la idea más abstracta de que con respecto a las elecciones su compromiso democrático era sólo epidérmico, hizo de este eslabón, originalmente tenue, algo bastante más fuerte a los ojos de muchos. Esto a su vez facilitó la identificación de la izquierda latinoamericana con los regímenes derrumbados de Europa Oriental. También allanó el camino para la acusación de irrelevancia: la izquierda latinoamericana se había vuelto obsoleta, ahora que la democracia y la economía de libre mercado habían ganado la Guerra Fría en el resto del mundo. Los intelectuales, los partidos o los gobiernos de izquierda en Latinoamérica estaban al lado de los derrotados; sus adversarios, del lado de los ganadores.

Para la izquierda latinoamericana, hasta cierto punto, el efecto más dañino de la conclusión de la Guerra Fría se ubica en esta sensación ge-

neralizada de derrota. Y al mismo tiempo, sus beneficios más importantes a largo plazo deberán buscarse cortando el cordón umbilical entre la izquierda y sus aliados en el mundo socialista, y en su desvinculación de cualquier práctica antidemocrática en el resto del mundo. A pesar de la confusión y la crisis que trajo la caída del bloque socialista, en combinación con la derrota del Frente Sandinista en las elecciones de febrero de 1990, el cortar con el pasado y el resto del globo abre perspectivas alentadoras para la izquierda latinoamericana.

Esta promesa es comprensible sólo si se sitúa en el contexto de las tendencias gemelas que caracterizaron la evolución del hemisferio en los últimos 10 años. Durante los ochenta y hasta principios de los noventa, Latinoamérica sufrió la más grave crisis social y económica desde la Depresión. Las cifras son bien conocidas y elocuentes: el ingreso *per cápita* disminuyó en todas partes con excepción de Colombia, Chile y la República Dominicana. El empleo se redujo en términos relativos y a veces absolutos, mientras que el gasto real en educación, vivienda y asistencia a la gente que subsiste en extrema pobreza se desplomó. Los pagos al servicio de la deuda para todo el continente alcanzaron la cifra de 40 mil millones de dólares al año, más de 400 mil millones de dólares para la década.

Latinoamérica se convirtió en exportadora neta de capitales en el momento justo en que la mecánica de su demografía anterior —tasas de mortalidad en descenso en los cincuenta y los sesenta junto a tasas crecientes de fertilidad que crearon en los sesenta y principios de los setenta un auge desmedido de infantes en el hemisferio— lanzó a millones de sus habitantes más jóvenes hacia un mercado de trabajo crónicamente débil.

Ha transcurrido casi medio siglo desde que el continente atravesó por tal periodo sostenido de privación social y económica. De no ser por las exportaciones de droga, la inmigración y la economía informal, reductora de salario pero absorbente de impactos, el resultado habría sido mucho más trágico.

Los efectos políticos de la «década perdida» fueron desactivados también por otra factor: el hemisferio experimentó su más importante y amplio proceso de democratización desde los treinta. Con excepción de los regímenes civiles o militares de Centroamérica respaldados por Estados Unidos, donde se efectuaban elecciones pero no tenían valor alguno, y de México, donde el cambio continuó ocurriendo a un ritmo lento hasta la frustración, los impulsos democratizadores en todos los campos de la esfera política barrieron a Latinoamérica. Esta tendencia rebasó la mera celebración de elecciones, e incluyó un renovado respeto a los derechos humanos en los países del cono sur con dictaduras previas, y una apertura de la prensa, los sindicatos y otros aspectos de la vida civil en Brasil y otras naciones.

Estas tendencias gemelas de la crisis y la democratización han dado luz a un panorama promisorio para la izquierda. Aunque esta última no siempre pudo mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la gente cuando tuvo oportunidad de hacerlo, Latinoamérica tendió hacia la izquierda en tiempos de crisis social y económica severas. Y aunque sus credenciales democráticas no hayan sido impecables, siempre sufrió más que otros sectores políticos por la extensión de la regla autoritaria, y al paso del tiempo se benefició más en la expansión de las instituciones democráticas. La gran mayoría de rupturas del orden institucional se dirigieron contra la izquierda, en gran parte por la visión militar de que la permanencia de prácticas democráticas la favorecía.

El retorno a estas prácticas y el agostamiento social y económico que ha significado pérdida para dos terceras partes de la sociedad latinoamericana, podrían constituir el presagio de un viraje a la izquierda en la política del continente. Aunque las apariencias parecen indicar que ocurre lo opuesto —esto es, la elección o acceso al poder de regímenes que adoptan políticas conservadoras en México, Brasil, Perú, más la derrota de las fuerzas claramente identificadas con la izquierda en Nicaragua y Chile—, está tomando fuerza una tendencia más profunda. Para Brasil y México, el verdadero mar de cambios en su política es que, por primera vez en años, la izquierda adquiere una constitución de masas y un liderazgo carismático bien establecido. Más aún, en otras elecciones dentro del hemisferio, los contendientes más inclinados a la izquierda parecen ser los ganadores, aunque luego procedan a poner en práctica la plataforma conservadora de sus rivales.

Aquellos indicios que la izquierda latinoamericana, tomando de los clásicos marxistas, ubica tradicionalmente como las «condiciones objetivas» para un cambio en el hemisferio, son más favorables que nunca a sus propósitos. Las «condiciones subjetivas» pueden también volverse más alentadoras —a pesar de los efectos negativos de los sucesos de Europa Oriental y la Unión Soviética, precisamente como resultado de la influencia favorable del colapso socialista—. Esta influencia ya se ha hecho sentir en tres formas distintas para ciertos sectores de la izquierda latinoamericana: por la eliminación de sus «desventajas» soviético-cubanas, democráticas y antiestadounidenses.

La izquierda en Latinoamérica ha sido descargada finalmente de tres tareas arduas y muy poco manejables que la forzaban a continuar en el pasado. Ya no tiene que demostrar que no es pro-soviética o pro-cubana, y que su acceso al poder no colocará a la infortunada nación como satélite del bloque oriental. Tampoco tiene que seguir probando que Estados Unidos no la percibe como enemigo mortal, y que su mandato no acarreará ostracismo y embargos, créditos que se secan y «contras» que pululan en todo campo o selva. Por último, ha sido absuelta de la tarea de mostrar que no transformará toda nación que gobierne en un páramo autoritario —un *gulag* tropical, andino o meridional.

En pocas palabras, la izquierda latinoamericana tiene la oportunidad repentina de despojarse del estigma comunista. Esto es en parte cierto para los pocos partidos de izquierda esencialmente no comunistas, no obstante marxistas, leninistas, castristas o alguna combinación de las tres. Pero es sobre todo cierta para la izquierda o centro izquierda socialista o semisocialista sin ligas cercanas con Cuba, con el marxismo leninismo o con la lucha armada. Esta triple absolución no es, en la mayoría de los casos, algo creado por la propia izquierda. Es un efecto directo del fin de la Guerra Fría, y del colapso de la Unión Soviética como superpoder y punto de referencia importante de la hegemonía mundial —o al menos regional.

La acusación de que un gobierno de ala izquierda o centro izquierda transformará inmediatamente cualquier país en Estado cliente del Sovietico ya no es creíble en ninguna parte de Latinoamérica. Y aunque el vínculo cubano se mantenga como factor —algunos sectores de la izquierda en ciertos países se siguen viendo como favorables a la hegemonía cubana —empieza a perder credibilidad rápidamente.

De igual forma, dado que el modelo antidemocrático de Europa Oriental y la Unión Soviética se ha reformado radicalmente, el espantapájaros de la «pesadilla totalitaria» cesó de funcionar, en cierto sentido, en la mayoría de las naciones latinoamericanas. Es muchos más difícil acusar a cualquier fuerza política del intento de implantar un sistema que ya no existe y cuyas desventajas son reconocidas por todos los países que lo crearon. A este respecto, las elecciones de Nicaragua constituyen un complemento esencial de este proceso. Prácticamente por primera vez, un régimen revolucionario en Latinoamérica deja el poder por la vía electoral pacífica. Los gobiernos de izquierda emanados de una revolución o incluso de elecciones, nunca abandonaron el poder —México, Cuba— o fueron forzados a salir por medios violentos, anticonstitucionales —Guatemala en 1954, Brasil en 1964, Chile en 1973, Granada en 1983. Las elecciones limpias puestas en marcha por los sandinistas, y su aceptación subsecuente de la derrota, no sólo ayudan a establecer su compromiso con el proceso democrático sino que contribuyen a mostrar que al menos una parte de la izquierda en Latinoamérica ha comprendido finalmente que la forma en que se obtiene el poder no está desconectada de lo que se hace con él. El cuestionamiento sistemático de las credenciales democráticas de los sandinistas puede no haber sido del todo justo u honesto; las elecciones celebradas en 1984, la amplitud concedida al diario de oposición *La Prensa* — aun bajo condiciones de guerra civil— y su tratamiento de prisioneros políticos, fueron, para los estándares latinoamericanos, honorables. Pero quedaba la sospecha, incluso entre los simpatizantes de los sandinistas y entre aquellos sensibles a su situación difícil, de que su compromiso con las elecciones era más táctico que estratégico, debido más a presiones externas y a consideraciones económicas que a su convicción. El hecho de aceptar su derrota en 1990 cierra este debate. Hoy los sandinistas han aceptado los mecanismos electorales

como el único camino legítimo al poder —tanto para conquistarlo como para retenerlo—. Sus razones para aceptarlo son menos importantes que el hecho de que el cambio haya ocurrido.

Por último, ahora que los Estados Unidos han dejado de ver una amenaza soviética tras cada revolucionario o reformador social latinoamericano, pierde validez la teoría de que un gobierno de izquierda necesariamente implica conflicto con su vecino del norte. Un gobierno de izquierda o centro izquierda puede percibirse como uno que acarrea caos económico y trastorno social, pero ya no es visto como un inevitable instigador de problemas para Estados Unidos.

Estados Unidos puede preferir otros regímenes —es probable que lo hará siempre— y aborrecer las políticas sociales o económicas de la izquierda, pero es cada vez más propenso a deponer la hostilidad abierta en estos asuntos.

De nuevo las elecciones de Nicaragua son un parteaguas. Mostraron en las urnas lo que muchos sospecharon antes con respecto a «los corazones y las mentes» de los latinoamericanos. Si el costo de una revolución o de una reforma drástica conlleva un conflicto sin cuartel con los Estados Unidos por un periodo indefinido, probablemente no valga la pena. Por primera vez en años, la izquierda puede argumentar que el costo ha disminuido, y que seguirá disminuyendo. Que esto sea suficiente para desactivar el punto de vista generalizado de que el poder de la izquierda produce una mutilación económica, es otro asunto. No pueden cancelarse todos los *handicaps* al mismo tiempo.

Dos casos confirman la importancia de la izquierda en el desvanecimiento de estos tres *handicaps*. Los dos países donde la izquierda o la centroizquierda es más fuerte que nunca —a pesar de sus inevitables problemas, divisiones y contradicciones— son precisamente aquellos donde la izquierda apenas nace y crece, completamente identificada con la democratización y totalmente desprovista de deudas, vínculos y compromisos emocionales con Cuba o la Unión Soviética: Brasil y México. Los nuevos partidos mexicano y brasileño de centro-izquierda establecieron su legitimidad democrática, nacional y «neutral» hacia Estados Unidos mucho antes de la revolución de Gorbachov en el Este: Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo entre el 31 y el 40% de los votos en las elecciones presidenciales de México en 1988, dependiendo de las cifras en que uno crea; el Partido Trabalhista Brasileiro de Leonel Brizola (PTB), el Partido dos Trabalhadores (PT) y el Partido Democrático Brasileiro (PSDB) reunieron el 48% de los votos en las elecciones presidenciales brasileñas de 1989.

Grandes sectores de la Iglesia brasileña, junto con los sindicatos de trabajadores, y miríadas de intelectuales y artistas que conforman la nueva izquierda brasileña, participaron activamente en la lucha contra la dic-

tadura militar y la represión que emergieron del golpe de 1964. Guiaron la lucha por los derechos humanos, contra la tortura y la censura, y por la celebración de elecciones presidenciales directas. La nueva izquierda participó activamente en las elecciones de gubernaturas estatales y las alcaldías (*prefeituras*), ganando pero también perdiendo, y aceptó su derrota en ciudades claves. La firmeza de sus credenciales democráticas no se debe únicamente a los años que pasaron peleando contra el régimen autoritario que gobernó Brasil por dos décadas, sino también a su conducta en la política municipal y estatal durante los últimos años.

Los partidos de la nueva izquierda brasileña nunca establecieron ligas cercanas con el Partido Comunista, y siguieron un rumbo aparte incluso en las elecciones de 1989. Nunca fueron —y nunca se les consideró— un apoyo incondicional de Cuba, a pesar de los lazos cordiales que tanto Brizola como Lula establecieron con Cuba muchos años antes. Y no obstante su fuerte extracción nacionalista, los dos líderes de la izquierda brasileña nunca provocaron la ira de los Estados Unidos, aunque es obvio que a Estados Unidos no le hubiera gustado la elección de ninguno de ellos. Además, no hubo «temor ruso» en las primeras elecciones presidenciales brasileñas en un cuarto de siglo.

Un fenómeno virtualmente idéntico se desarrolló en México con Cárdenas. Desde que rompió en 1986 con el PRI, el partido en el poder, a pesar de sus antecedentes familiares y políticos —su padre Lázaro fue presidente de 1934 a 1940—, amplios sectores del pueblo mexicano lo identifican con una lucha por cambiar el autoritario sistema del país, de un solo partido. Obviamente ayudó el hecho de que Cárdenas nunca estableció lazos con la izquierda comunista y socialista en México, y que su relación con Cuba fuera tenue. (La independencia de Cárdenas con respecto a Cuba y la Unión Soviética nunca estuvo realmente en la agenda, en parte por el *status* de su padre como héroe nacional). La percepción extendida de que le robaron las elecciones de julio de 1988 reforzó sus credenciales dentro del país.

Más aún, los constantes viajes de Cárdenas a Estados Unidos, su voluntad para presentar su caso ante públicos estadounidenses, el recuerdo en México de cómo manejó su padre la confrontación con Estados Unidos al momento de la expropiación petrolera de 1938 —desactivando las tensiones sin retroceder—, contribuyen a hacer pensar que aunque Estados Unidos obviamente prefiere a Salinas, no llegará a extremos ni le hará la guerra a Cárdenas. El dicho popular en México de que Estados Unidos nunca permitiría un régimen de centro izquierda en el país, empezó a desintegrarse.

La coalición Lula-PT-PTB en Brasil y el fenómeno Cárdenas en México son los primeros ejemplos, en muchos años, de movimientos importantes de la izquierda que borran el estigma comunista soviético, antiestadounidense. Hay otros ejemplos, aunque no muchos, y no son con-

cluyentes: el renovado Partido Socialista en Chile, junto con el Partido para la Democracia o PPD, es quizá el más importante. En el caso de Chile, la larga tradición democrática, junto con la derrota del experimento de Allende y el subsecuente exilio de la mayoría de los socialistas chilenos, generó un efecto positivo: el deseo y los medios de cambiar las actitudes con respecto a los puntos claves de democracia, nexos con la Unión Soviética y Cuba, y relaciones con Estados Unidos. Además, las políticas económicas conservadoras de libre mercado de Augusto Pinochet indujeron a muchos izquierdistas, en especial dentro del Partido Socialista, a revisar su aproximación a la economía. Los socialistas chilenos no se resignaron a reproducir el legado económico de la dictadura, al que continúan considerando injusto, con frecuencia ineficaz y siempre con terribles costos sociales. Pero sí enfatizan la necesidad de una administración económica que funcione y un programa de modernización económica socialmente justo.

En este sentido, y por su especial situación, la izquierda chilena se ha puesto a la delantera de sus contrapartes brasileña y mexicana, sobre todo en el terreno económico. No obstante, los tres movimientos enfrentan dificultades similares. En Chile, la izquierda renovada tiene indispensables credenciales democráticas y ha adoptado una plataforma económica coherente y a tono con los tiempos —quizá demasiado—. Aún no es claro hasta qué grado las propuestas de la izquierda chilena son sustancialmente diferentes de los demás sectores del espectro político. Contrariamente, en México y Brasil la izquierda se distingue de otras fuerzas en los aspectos políticos y económicos. Políticamente, la alternativa es coherente, moderna, atractiva, pero en lo económico la situación se vuelve bastante más confusa. En las dos economías más grandes del hemisferio, la izquierda tiene aún que concebir una alternativa que conjugue las tres condiciones mínimas para el éxito: que sea de verdad distinta de las políticas existentes; que sea viable, realista y probada desde el punto de vista técnico; y que sea vendible políticamente, no muy compleja o matizada para ser entendible, ni muy vaga o confusa si quiere ser tomada en serio.

Para el electorado, los intelectuales y los partidos de izquierda y centro izquierda chileno, mexicano y brasileño, el colapso del mundo socialista está lejos de ser un desastre o una experiencia depresiva. Por más que no se les perdonen las consecuencias negativas que afectan a la izquierda latinoamericana como un todo, el final de la Guerra Fría consume su liberación de aquellas limitaciones que ellos ya habían eliminado en gran medida. Estos elementos de la izquierda en el hemisferio no son impermeables al síndrome de culpa por asociación, ni a la crítica de que las estrategias económicas que propugnan ya fueron abandonadas por los gobiernos y las políticas del resto del mundo. Pero dado que sus raíces no crecieron profundamente —o para nada— en la decepcionante tierra fértil del marxismo o socialismo latinoamericano, la revolución de 1989 en el Este es un acontecimiento bienvenido, no un retroceso.

Esta perspectiva se extenderá eventualmente al resto de la izquierda latinoamericana, aunque el proceso no sea simple. La ruptura creciente en Centroamérica, entre los gorbachovistas y los procubanos, es una expresión obvia de las dificultades que experimentan muchas organizaciones. El resultado del drama cubano será un factor decisivo para determinar cómo responderán a las transformaciones del mundo post Guerra Fría muchas organizaciones que aún mantienen lazos cercanos con Fidel Castro. Claramente, posiciones como la de Salvador Samayoa del FMLN salvadoreño muestran que al menos parte de la izquierda de su país se mueve en la ruta de la renovación. Samayoa escribió recientemente en el *Washington Post*:

«Las recientes elecciones en Nicaragua muestran la existencia de mejores caminos que la confrontación armada para resolver conflictos y fortalecer una democracia plural estable... El FMLN ha hecho importantes concesiones... enteramente consistentes con la política estadounidense: mejoras en los derechos humanos, elecciones libres y democracia plural. Todo esto estaría garantizado por mediación de las Naciones Unidas y por una supervisión internacional como la que llevó a celebrar elecciones libres, justas y pacíficas en Nicaragua.»

Es cierto, son sólo palabras, pero son importantes y comprometen al que las pronuncia. De igual modo, la lucha de los sandinistas en Nicaragua para convertirse en una oposición firme, leal y de principios, los forzarán a adoptar muchas prácticas que contribuirán a su democratización definitiva.

Por primera vez desde la II Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría, Latinoamérica encara la posibilidad de contender por el poder en un terreno relativamente nivelado, libre de las desventajas que la debilitaron durante el medio siglo que pasó. En un continente donde tres cuartas partes de la población son pobres y se han empobrecido más en la década pasada, la izquierda puede competir por fin en sus propios términos, y con su plataforma propia: democracia, soberanía, crecimiento económico y justicia social, todas encaminadas a mejorar a los millones de latinoamericanos excluidos de los beneficios de las bonanzas previas y los experimentos actuales. La izquierda puede ganar y recibir la posibilidad de probar que vale, o mostrarse como algo obsoleto e incompetente sin remedio. Pero al menos se le juzgará por méritos propios y no a través de las sombras anticomunistas y antisoviéticas distorsionadas y proyectadas a distancia.

El final de la Guerra Fría puede contribuir a la «africanización» de Latinoamérica, relegándola a los márgenes de la atención mundial y excluyéndola del curso principal de comercio, inversión y crédito internacionales. El peligro es real, y no hay casi nada que puedan hacer los pueblos o las autoridades del hemisferio para reducirlo o eliminarlo. Pero la transformación monumental de los asuntos internacionales puede ge-

nerar también un efecto duradero dentro de muchas naciones de Latinoamérica: la redención final de las fuerzas sociales y políticas situadas a la izquierda del espectro político. El final de la Guerra Fría puede lograr así lo que nada ni nadie antes: la «latinoamericanización» final de la izquierda latinoamericana y su enraizamiento definitivo en la tierra todavía yerma del hemisferio.

Traducción: Pedro Herrera
